



GD-F-008 V.9

Página 1 de 7

RESOLUCIÓN No. SSPD - 20144010043995 DEL 09/10/2014
POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,

en ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y en el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012 y

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual *"se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Que el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012, por medio del cual se reglamentó la Ley 1176 de 2007, estableció que *"La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007. Para estos efectos, verificará que los municipios y distritos hayan dado cumplimiento a los requisitos que se establecen en el artículo 9 del presente decreto y 10 para el caso de los prestadores directos de alguno de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, en el año calendario inmediatamente anterior."*

Que la Superintendente de Servicios Públicos, mediante Resolución No. SSPD 20111300032265, del 21 de octubre de 2011 delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con los decretos 1040 de 2012 y 1484 de 2014; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el municipio de El Águila, del departamento del Valle del Cauca, es de categoría 6 y como prestador directo del servicio de aseo a 31 de diciembre de 2012, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 3° y 5° del Decreto 1639 de 2013, cual fuera la norma que rigió la vigencia que nos ocupa.

Que mediante la Resolución No. SSPD 20144010017635, del 29 de mayo de 2014, la SSPD decidió descertificar al municipio de El Águila, departamento del Valle del Cauca, en relación con la administración de los recursos del SGP-APSB de la vigencia 2012, por cuanto no encontró acreditado el cumplimiento de todos los requisitos dispuestos en el artículo 5° del Decreto 1639 del 2013, decisión que fue recurrida por la representante legal del ente territorial, mediante los radicados Nos. SSPD 20145290370182, del 14 de julio de 2014 y 20145290375492, del 15 de julio de 2014.

Que con la Resolución No. SSPD 20144010034625, del 4 de agosto de 2014, se rechazó el recurso de reposición presentado por la alcaldesa del municipio de El Águila, por considerar que se interpuso extemporáneamente, hecho que no posibilitaba su estudio de fondo, conforme a lo estipulado en los artículos 76 y 77 del C.P.A.C.A.

Que la señora Nelly Argenis Grajales Duque, representante legal del municipio de El Águila, mediante el radicado No. SSPD 20145290498992, del 8 de septiembre de los corrientes, conmina a esta superintendencia, a resolver de fondo el mencionado recurso de reposición, toda vez que si bien su despacho *"omitió enviar los soportes de su diligenciamiento dentro de los términos de ley"*, con la guía expedida por la empresa de correo Interrapidísimo que adjunta a su escrito, evidencia que el documento fue remitido a esta entidad el 8 de julio de 2014, encontrándose dentro del término que la Ley dispone para interponer la contradicción.

Que esta entidad, a la luz de lo aducido y allegado por la señora alcaldesa del municipio de El Águila, y en virtud del principio de eficacia consagrado en el numeral 11 del artículo 3° de la ley 1437 del 2011, considera un imperativo resolver de fondo el recurso de reposición interpuesto, por cuanto se logró establecer que fue enviado dentro del término legal, razón por la cual pasa a desarrollar cada uno de los aspectos alegados por la impugnante como sigue.

II. DE LA RESOLUCIÓN DE DESCERTIFICACIÓN

Que mediante Resolución No. SSPD 20144010017635, del 29 de mayo de 2014, la SSPD decidió DESCERTIFICAR al municipio de El Águila, departamento de Valle del Cauca, por no haber cumplido los siguientes criterios previstos en el artículo 5° del Decreto 1639 de 2013:

a). Reporte al SUI del formato Acto de Aprobación de Tarifas, expedido antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados, de conformidad con la normatividad expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios relacionada con el cargue de información al sistema.

b). Cumplimiento del 30% de la obligación de reportar tarifas aplicadas y la facturación al SUI.

2.1 Notificación de la Resolución No. SSPD 20144010017635 del 29 de mayo de 2014

Para efectos de notificar la Resolución No. SSPD 20144010017635, del 29 de mayo de 2014; se remitió citación a la señora alcaldesa del municipio de El Águila, del departamento de Valle del Cauca, mediante el oficio No. SSPD 20144010286091, del 29 de mayo de 2014, enviado por correo certificado el 5 de junio, advirtiéndole que en caso de no comparecer personalmente, se notificaría la decisión mediante aviso conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Transcurrido el término para que la representante legal del ente territorial compareciera a notificarse personalmente del contenido de la Resolución SSPD No. 20144010017635, del 29 de mayo de 2014, sin que ello ocurriera, se procedió a enviar el respectivo aviso de notificación mediante el oficio No. SSPD 20144010321721. De acuerdo a la información remitida por la empresa SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. éste documento fue entregado el 21 de junio de 2014, en la Alcaldía Municipal, por lo tanto y de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, la notificación se considera surtida al día siguiente de su entrega en el lugar de destino.

La señora Nelly Argenis Grajales Duque, en su calidad de alcaldesa del municipio de El Águila, del departamento de Valle del Cauca, mediante documento radicado en esta entidad bajo los números SSPD 20145290370182, del 14 de julio de 2014 y 20145290375492, del 15 de julio de 2014, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. SSPD 20144010017635.

En atención a que el recurso de reposición fue rechazado mediante la Resolución No. SSPD 20144010034625, del 4 de agosto de 2014, por presentarse fuera de término, la representante legal del municipio a través del radicado No. SSPD 20145290498992, del 8 de septiembre del 2014, allega copia de la guía de la empresa de correo Interrapidísimo que evidencia el envío del recurso dentro del plazo concedido para el efecto, éste documento es considerado como una prueba sobreviniente en este proceso de certificación.

III. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

3.1 Verificación de los requisitos de forma

El artículo 77 del C.P.A.C.A., establece que, para efectos de ser admitidos y resueltos los recursos de reposición deben interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad e indicar el nombre y la dirección del recurrente.

Mediante la Resolución No. SSPD 20144010034625, del 4 de agosto de 2014, se rechazó el recurso de reposición presentado por la alcaldesa del municipio de El Águila, mediante los radicados Nos. SSPD 20145290370182, del 14 de julio de 2014 y 20145290375492, del 15 de julio de 2014, por considerar que se interpuso fuera de término, no obstante, a través del radicado No. SSPD 20145290498992, del 8 de septiembre de los corrientes, el municipio remitió a esta entidad escrito en el cual pone de presente que el recurso fue interpuesto dentro del término legal, toda vez que siendo la fecha límite para su presentación el 9 de julio del 2014, lo envió mediante empresa de correo el 8 de julio, como consta en la guía que allega, y que esta entidad tiene como válida.

De conformidad con lo anterior, se observa que el recurso de reposición fue presentado por la alcaldesa del municipio de El Águila, del departamento de Valle del Cauca, quien de conformidad con el artículo 314 de la C.P. es considerada la representante legal del ente y por lo tanto era la funcionaria competente para interponerlo, además se confirma que fue remitido a esta entidad dentro del término legal y que en él se sustentan de forma concreta los motivos de inconformidad y se indicó la dirección para efectos de recibir notificaciones.

Según lo expuesto, el recurso presentado, cumple los requisitos exigidos por el Artículo 77 del C.P.A.C.A., por lo tanto se procederá a efectuar el análisis de fondo del recurso.

3.2 Argumentos del recurrente

Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte de la alcaldesa municipal:

"1. Cuando me posesioné como Alcaldesa, el municipio de El Águila – Valle del Cauca, venía prestando el servicio de Aseo de forma directa.

2. Una vez tomé posesión en el año 2012 inicié el proceso de elaboración, presentación y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal.

3. Dentro del plan de Desarrollo se fijó como meta garantizar la recolección, transporte y disposición del 100% de los residuos sólidos generados en el municipio.

4. Hasta comienzos del presente año el municipio prestó directamente el servicio público domiciliario de aseo.

5. El municipio mediante resolución No. 026 de enero 24 de 2012, estableció las tarifas a cobrar por la prestación de dicho servicio durante la vigencia fiscal del año 2012, sin embargo por un error, por parte de la persona a cargo, en el proceso de diligenciamiento de los formatos del SUI, la información contenida en la citada resolución no fue cargada.

6. Que efectivamente el cobro de las tarifas durante el año 2012 se realizó a través de los recibos del impuesto predial.

De lo expuesto anteriormente se desprende que para la vigencia fiscal del año 2012 el municipio había empezado a dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prestación del servicio público domiciliario de aseo."

3.3. De las pruebas relacionadas en el recurso.

Con el documento radicado en esta entidad con el No. SSPD 20145290370182 y 20145290375492, del 14 y 15 de julio de 2014, se allegaron las siguientes pruebas:

3.3.1. Resolución No. 026, de enero 24 del 2012, por medio de la cual se fijan las tarifas para el cobro del servicio de aseo en el municipio de El Águila, para el año 2012.

3.3.2. Recibos de caja Nos. 640, 2748, 320, 1130, 1315, 1999, 569, 1656, 1478, 1010,828, 2566, 2442 y 2286.

3.3.3. Ejecución presupuestal de ingresos del municipio El Águila, año 2012.

Los anteriores documentos, en su valor integral, se anexan al expediente.

IV. ANÁLISIS DE FONDO

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta superintendencia procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

4.1. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del criterio relacionado con la implementación y aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA.

Alega la impugnante, que mediante la Resolución No. 026 del 24 de enero de 2012, el municipio de El Águila estableció las tarifas para el servicio de aseo de la vigencia 2012, pero que debido a un error la Resolución en comento no fue cargada en el Sistema Único de Información - SUI.

Ahora bien, de lo revisado en el SUI, esta entidad encontró que el municipio cargó el día 23 de abril de 2010, una certificación suscrita por el alcalde municipal, en la cual certifica que el municipio prestó el servicio de aseo para la vigencia 2009, que el servicio se cobró a través de la factura del impuesto predial y que por tanto, dicho cobro no se ha realizado con base en un estudio tarifario, motivo por el cual este requisito se tuvo como incumplido, toda vez que el acto de aprobación de tarifas requerido no fue reportado.

A continuación se adjunta imagen del reporte y de la certificación:

743	MUNICIPIO DE EL ÁGUILA	Acto de aprobación de tarifas por aseo domiciliario (Formulario 11 de la Cira SSPD-CRA 9 de 2009)	CERTIFICADO 2009 (20)	Certificado	Anual	2009	1	2010-04-23
-----	------------------------	---	-----------------------	-------------	-------	------	---	------------

<p align="center">EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE EL ÁGUILA VALLE DEL CAUCA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y CONSTITUCIONALES</p> <p align="center">CERTIFICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Que en el municipio de El Águila Valle del Cauca el servicio domiciliario de Aseo para la vigencia 2009 fue prestado por la Administración Municipal. ✓ Que dicho servicio se ha venido cobrando a través de la factura del Impuesto Predial. ✓ Que en virtud de lo anterior dicho cobro no se ha realizado con base en un estudio tarifario. <p>Dado en la Alcaldía Municipal de El Águila Valle del Cauca, a los Veinte (20) días del mes de Enero de Dos Mil Diez (2.010).</p> <p align="right">A</p> <p><i>Gilder López Serna</i> GILDER LÓPEZ SERNA Alcalde Municipal</p>

Teniendo claro el motivo por el cual se tuvo como incumplido el requisito en cuestión, sea lo primero advertir, que el error que invoca la recurrente de no haber cargado la información requerida, no puede ser considerado como un eximente de responsabilidad, ya que para que los planteamientos esgrimidos sean tenidos como justificantes, deben enmarcarse dentro de los conceptos de fuerza mayor o caso fortuito, definidos por el Artículo 1° de la Ley 95 de 1890, en los siguientes términos: "Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público".

Al respecto el tratadista Arturo Alessandri Rodríguez, en su obra "De la responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil", Páginas 599 y 600, sobre el caso fortuito y la fuerza mayor señala:

"El caso fortuito o la fuerza mayor supone, (...), un acontecimiento imprevisto e irresistible. Es imprevisto, cuando no hay ninguna razón especial para creer en su realización e irresistible, cuando no es posible evitar sus consecuencias.

El hecho debe ser imprevisto e irresistible en sí mismo, es decir, que ni el agente ni ninguna otra persona colocada en las mismas circunstancias de tiempo y de lugar habría podido preverlo. Se requiere una imposibilidad absoluta. Una simple dificultad o una imposibilidad relativa, personal del agente, no basta; la culpa se aprecia en abstracto. Un hecho que hubiera podido prever y evitar con mayor diligencia o a costas de un mayor esfuerzo o

sacrificio no es caso fortuito; un hombre prudente lo habría previsto y evitado. Esto es suficiente para privarlo de ese carácter."

De otra parte, en reiterada jurisprudencia se ha estudiado lo referente al caso fortuito o fuerza mayor, de donde se destaca lo siguiente¹:

"Según el verdadero sentido o inteligencia del artículo 1º de la ley 95 de 1890, los elementos integrantes del caso fortuito o fuerza mayor (...), deben ser concurrentes (imprevisibilidad e irresistibilidad) lo cual se traduce en que si el hecho o suceso ciertamente es imprevisible pero se le puede resistir, no se da tal fenómeno, como tampoco se configura a pesar de ser irresistible pudo preverse. De suerte que la ausencia de uno de sus elementos elimina la estructuración de la fuerza mayor o caso fortuito."

De la jurisprudencia y la doctrina expuesta, podemos concluir que, en relación con la fuerza mayor o caso fortuito, se debe tener en cuenta:

- a) En cada caso concreto se debe analizar y ponderar todas las circunstancias que rodean el hecho, para determinar si éste constituye o no fuerza mayor o caso fortuito.
- b) Los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito deben ser alegados y probados por quien los invoca. Es decir, la carga de la prueba la debe soportar quien invoca tales hechos y no quien debe valorarlos.
- c) Debe tratarse de hechos imprevisibles e irresistibles, y por tanto sobrevinientes; esto es, que su previsión escape en condiciones normales a cualquier sujeto y no a una persona en particular, y que además de no haberse podido prever, sea imposible evitar que el hecho se presente.
- d) No constituyen fuerza mayor o caso fortuito los hechos que acontecen frecuentemente o con cierta periodicidad, ni hay fuerza mayor o caso fortuito cuando el obstáculo dificulta el cumplimiento de una obligación, pero no la imposibilita.
- e) Los hechos no deben ser atribuibles a la culpa, esto es, negligencia, descuido o impericia, de la persona que los invoca.

En este orden de ideas, es evidente que el error que aduce la recurrente, no obedece a una imposibilidad absoluta, por tanto, no constituye una justificación fundamentada, habida cuenta de que con mediana diligencia se hubiese evitado el incumplimiento del requisito objeto de discusión.

Ahora bien, es necesario señalar que la Resolución No. 026 del 2012, allegada con el recurso, no puede ser tenida como válida para acreditar este criterio, toda vez que dicho documento debió cargarse en el SUI a más tardar el 30 de agosto del 2013, conforme a lo dispuesto por el artículo 7º del Decreto 1639 del 2013, cual fuera el acto administrativo que rigió el proceso de certificación atinente a la vigencia 2012, situación que no sucedió en este caso, por cuanto lo que se cargó fue una certificación que no guarda relación alguna con lo solicitado, ni con la vigencia evaluada y aún más, debido a que el argumento en el cual fundamenta la recurrente la ausencia de cargue de la Resolución, carece de fundamento jurídico y fáctico.

Pues bien, en este punto es importante resaltar, que las normas que fijan plazos, como la citada en el párrafo que antecede, es una norma procesal y de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1564 de 2012, *"Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley"*.

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado como sigue²: *"(...) nótese cómo las leyes de estrípe procesal son de orden público y en consecuencia de obligatoria observancia. Sus dictados entonces, son ajenos al querer de los individuos: particulares y funcionarios llamados a aplicarlas."*, además advierte que: *"(...) En efecto, ha de repetirse, que la condición de normas taxativas que caracteriza las leyes que rigen los procedimientos es de inexorable acatamiento, máxime cuando estas normas constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del sistema normativo."* y concluye señalando: *"En este orden, los términos procesales se hacen tan imperativos que su cumplimiento, es una manifestación de uno de los principios sobre los cuales reposa el derecho procesal. Se trata del principio de la preclusión o de la eventualidad, el cual consiste en la clausura de las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de cada etapa del proceso."*

"(...)Lo anterior, por cuanto el señalamiento de términos judiciales con un alcance perentorio, no sólo preserva el principio de preclusión o eventualidad sino que, también, permite, en relación con las partes, asegurar la vigencia de los principios constitucionales de igualdad procesal y seguridad jurídica, ya que al imponerles a éstos la obligación de realizar los actos procesales en un determinado momento, so pena de que precluya su oportunidad, a más de garantizar una debida contradicción, a su vez, permite otorgar

1 Sentencia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil 20 de noviembre de 1989.

2 Corte Constitucional. Sentencia T - 213 del 28 de febrero 2008. MP Doctor Jaime Araujo Rentería

certeza sobre el momento en que se consolidará una situación jurídica."

Así las cosas, como sucedió en este caso, era indudable que al dejarse vencer el término señalado en el artículo 7° del Decreto 1639 de 2013, sin reportar el acto de aprobación de tarifas en el SUI, la única decisión viable que podía tomar esta superintendencia consistía en descertificar al municipio de El Águila.

4.2. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el reporte al SUI del 30% de la obligación de reportar tarifas aplicadas y la facturación al SUI.

El municipio respecto de este requisito, no realizó pronunciamiento alguno, por tanto se confirma lo manifestado en la Resolución que se recurre, en el entendido de tenerlo como incumplido.

4.3. Del recurso de queja

Es preciso aclararle a la recurrente, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del C.P.A.C.A, el recurso de queja se interpone a consideración del interesado, cuando el de apelación se rechace, sin embargo en el presente caso se tiene, que contra la Resolución No. SSPD 20144010017635, del 29 de mayo de 2014, no procede el recurso de apelación, tal como lo señala el numeral 2, del artículo 74 citado así:

***ARTICULO 74. RECURSOS EN LA VÍA GUBERNATIVA.**

(...) No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, Superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos."(...) (Subrayado fuera de texto).

Como quiera que, la función de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB fue delegada por el Superintendente de Servicios Públicos al Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo mediante la Resolución No. 20111300032265 del 21 de octubre de 2011, las decisiones que expida este funcionario serán susceptibles solamente del recurso de reposición. Dicha delegación tiene como fundamento los artículos 9 a 10 de la Ley 489 de 1998.

Hasta aquí es claro entonces, que las decisiones adoptadas por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, no están sujetas a ser impugnadas mediante el recurso de Apelación, en este entendido, el recurso de queja no es procedente, dado que la posibilidad de interponerlo se supedita al rechazo de un recurso de apelación, lo cual en este caso no es de recibo ya que conforme a lo expuesto, la Resolución No. SSPD 20144010017635, del 29 de mayo de 2014, no es susceptible de apelación y por ende de queja.

Así las cosas, lo que sucede en el presente asunto es que a la luz de lo alegado por la señora alcaldesa de El Águila, mediante el radicado No. SSPD 20145290498992, del 8 de septiembre del año en curso, esta entidad consideró imperiosa la necesidad de resolver de fondo el recurso de reposición interpuesto, por cuanto se pudo establecer que dicho documento fue enviado dentro del término legal, en este orden de ideas, dando aplicación al numeral 11 del artículo 3° de la Ley 1437 del 2011, que consagra el principio de eficacia, esta superintendencia resuelve el recurso, sin embargo no lo evacua por vía de queja, toda vez que como se explicó no es el mecanismo jurídico idóneo.

4.4. De la ejecutoria de la decisión que decide rechazar un recurso de reposición

Mediante los radicados Nos. SSPD 20144010406231 y 20144010408331 del 18 y 21 de julio del 2014, esta entidad informó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al gobernador del departamento del Valle del Cauca, la firmeza de la decisión que descertificó al ente territorial que usted representa, en este entendido, el acto administrativo en comento se tuvo en firme el 10 de julio de los corrientes.

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta lo argumentado por la señora alcaldesa del municipio de El Águila, mediante el radicado No. SSPD 20145290498992, del 8 de septiembre de 2014, esta superintendencia decidió resolver de fondo el recurso de reposición interpuesto, así las cosas, una vez notificada la decisión aquí adoptada, personalmente o por aviso, se procederá nuevamente a establecer la fecha de firmeza para efectos de comunicar lo propio a las entidades correspondientes.

Por lo motivos expuestos en los numerales 4.1 y 4.2 de esta Resolución, dado que se estableció que el municipio no acreditó el cumplimiento de los requisitos que se le demandan, el recurso formulado por la señora Nelly Argenis Grajales Duque, como alcaldesa municipal del municipio El Águila no prospera, en consecuencia la Resolución recurrida se confirma.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución No. SSPD 20144010017635, del 29 de mayo de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución a la alcaldesa del municipio de El Águila, departamento de Valle del Cauca, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento de Valle del Cauca, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.

**JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO**

Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Vanessa Benavides Quevedo - Contratista Grupo de Certificaciones e información

Revisó: Nubia Stella Duarte Blanco - Contratista Grupo de Certificaciones e información

Aprobó: Samuel Alfonso Forero - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Ángela López Villegas - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Expediente: 20094016523080376A